

Fecha: 05-04-2020
Medio: El Mercurio
Supl.: El Mercurio - Cuerpo D
Tipo: Actualidad
Título: LA DIFÍCIL RUTA DE MANDO del general Ricardo Martínez

Pág.: 8
Cm2: 1.439,6
VPE: \$ 18.910.638

Tiraje: 126.654
Lectoría: 320.543
Favorabilidad: ☐ No Definida

"Él estuvo disponible a dar un paso al costado". Era 9 de noviembre de 2018 y el Ejército había llamado a retiro a 21 de sus 46 generales: era el recambio más profundo que el alto mando haya experimentado desde el retorno de la democracia. El general Ricardo Martínez, entonces, vivía uno de los momentos más duros de su carrera. El más tenso y difícil con el gobierno de Piñera. En el oficialismo recuerdan que, por esos días, Martínez mostró su incomodidad ante la opción de remover a generales por "la más pequeña sospecha". Estaba recién partiendo su ruta de comandante en jefe y se ponía difícil.

"El cambio podría haber sido mayor, pero él puso su cargo a disposición", afirman. Martínez, agregan, buscaba dar un señal: que nadie se podía aferrar a un cargo. Con eso, además, se aseguraba que los generales removidos aceptaran las condiciones. Conversó, dicen, con cada uno de los generales que se fueron. Esa semana, el general Martínez ya lanzaba una señal. En el Congreso, en la comisión de Defensa, tres días antes, dijo que uno de los objetivos que se había trazado para su mandato era reflexionar sobre el actuar de la institución en los últimos cincuenta años. Si bien sus dichos eran valorables, tampoco causaron mayor revuelo, pues Martínez asumió en marzo de ese año con un escándalo que luego debió sobrellevar por varios meses: el fraude en el Ejército por uso ilegal de gastos reservados, conocido como el caso Pasajes, que terminó el año pasado con el procesamiento judicial de los ex comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

Han pasado dos años y el camino se ha tornado aún más complejo: la institución ha vivido dos estados de excepción. Uno para el estallido del 18 de octubre y, ahora, el coronavirus. Pero eso también volvió su ruta más firme. Mayoritariamente se le reconocen hoy habilidades políticas y comunicacionales, un estilo más dialogante y la confianza del Gobierno, que en un principio fue más esquiva.

A muchos les costaba su estilo "toso", como lo definen, menos de salón. Para describirlo, recuerdan un episodio del 19 de septiembre de 2018, en un homenaje en la Tumba del Soldado Desconocido de la Plaza Baquedano. Mientras Martínez participaba de la tradición, una persona interrumpió la actividad, a gritos, para insultar a la institución. "Dígame a mí lo que dijo", le respondió Martínez, quien frenó el encuentro para encarar al hombre.

Eso sí, en el mundo castrense reconocen que ha dejado atrás ese sello. Las razones, agregan, no han sido pocas. En el Parlamento, por ejemplo, releva el diagnóstico acertado que tuvo la institución para el estallido social. "Siempre dijeron que era un tema de desigualdad, no de orden público", afirma una fuente opositora.

ATERRIZAJE FORZOSO

No era el favorito del entonces Presidente electo, Sebastián Piñera. Michelle Bachelet efectuó el nombramiento de Martínez sin haberlo abordado con Piñera. Eso, dicen, fue resentido por la administración entrante, que prefería dejar al mando al general John Griffiths, quien tenía contactos amplios en el mundo político.

Martínez, entonces, no solo tenía a cuestas la lejanía del gobierno entrante, sino una oposición interna que, en dos años, le ha complicado su conducción.

Sus cercanos cuentan que, desde el inicio, hubo un grupo de generales en retiro —sindicados como "pinochetistas"— que trataron de perjudicar su gestión. "Los primeros meses fueron complejos, levantaron rumores en su contra, como por ejemplo, de viajes que no había realizado o que estaba vinculado al caso Pasajes, recuerdan en el Gobierno. Ese mismo grupo lo veía como un militar distante a la figura de Pinochet. Su historia familiar tampoco lo ayudaba, pues, hasta hoy lo consideran un oficial con sensibilidad de centroizquierda. Sus cercanos, por su parte, defendían que Martínez no era un general político y las críticas eran "injustas".

El senador independiente Alejandro Guillier, miembro de la comisión de Defensa durante el segundo gobierno de Bachelet —este año, además, se reincorporó a la instancia—, recuerda el nombramiento de Martínez y dice que "no tenía cuestionamientos de orden económico en momentos en que eso era un tema". En ese sentido, describe al general como una persona vinculada "a una carrera estrictamente militar y no a la política".

En el Congreso, asimismo, dicen que cada vez que asiste a las respectivas comisiones de Defensa "responde con soltura y firmeza". No tiene políticos cercanos, se remite a dialogar por temas precisos con los integrantes de Defensa", agregan.

Si se acercan al director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con quien mantiene permanente contacto desde que compartieron en el Colegio Interamericano de Defensa, en 2002 y 2003. "Felicito a @mbachelet por el nombramiento del general Ricardo Martínez como comandante en jefe del Ejército de Chile. Lo conozco hace muchos años y sé de su profesionalismo e interés por el respeto de los DDHH", escribió Vivanco el 15 de noviembre de 2017 en su cuenta de Twitter.

Luego de seis meses de asumir el cargo, Martínez enfrentó el reembolso de pasajes —causa indagada por la ministra Romy Rutherford— con el interrogatorio de Griffiths,

COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO HA DIRIGIDO DOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN:

LA DIFÍCIL RUTA DE MANDO del general Ricardo Martínez

Tuvo un comienzo complejo, marcado por polémicas, grabaciones, procesamientos de excomandantes en jefe y salidas masivas de miembros del alto mando. Pero su actuar en el 18-O levantó su figura ante el Gobierno, y se ganó la confianza del Presidente Piñera. Y también dentro de su institución y entre los oficiales retirados, algunos de los cuales lo miraban con resquemor. Una ruta compleja para Martínez, que ahora se prepara para el difícil escenario poscoronavirus. | A. LÓPEZ, P. CODOU y P. VALENZUELA



Ricardo Martínez Menanteau asumió como comandante en jefe del Ejército el 9 de marzo de 2018.

entonces la segunda figura de mayor rango en el Ejército, quien, además, mantenía un fuerte respaldo interno. Con ese hecho, la división entre ambos "bandos" comenzó a crecer. Algunos decían que Martínez quería sacar del camino a Griffiths, "desconociendo el carácter independiente de la justicia militar y especialmente de la ministra y la tradición, hasta entonces existente, de considerar un procesamiento como motivo suficiente para el retiro de cualquier general activo", dice una fuente de la institución.

Un mes después, en tanto, el 6 de octubre, el entonces coronel Germán Villarroel realizó, en la Escuela Militar, una ceremonia en la que,

entre otras cosas, se homenajeó a Miguel Krassnoff —condenado por violaciones a los Derechos Humanos—, que fue ampliamente comentado en la opinión pública. Este hecho generó la renuncia del coronel Villarroel y un cuestionamiento al mando de Martínez.

Solo días después, Griffiths renunció al Ejército luego de ser procesado. Entonces faltaba un mes para el día histórico del recambio del alto mando.

Hoy no solo recuerdan el duro momento que vivió Martínez con dicha renovación de generales, sino la tensa relación que se dio con el ministro de Defensa, Alberto Espina.

"En el Ejército se pedía poner paños fríos a la situación de los pasajes", dice una fuente castrense, quien explica que, por esos días, se solicitaba rescatar que la mayoría había actuado de manera transparente. "El Ejército sentía que Defensa no dio señales de apoyo en los momentos complejos, que primaron los intereses políticos por sobre los institucionales", agrega la misma fuente.

En paralelo, el Gobierno insistía en que el recambio del alto mando era una situación compleja, pero "correcta". Hoy recalcan que no se podía correr el riesgo de que cada semana "se declarara reo a un militar".

En el Ejército, por su parte, resentían que el Gobierno había adoptado una postura similar ante la institución por el caso pasajes, tal como ocurrió con Carabineros con la "Operación Huracán".

"No todos los generales y oficiales en retiro están de acuerdo con la justificación del Gobierno, teniendo en cuenta que ninguno de los generales llamados a retiro al renunciar al alto mando en 2018 ha sido sometido a proceso y ni siquiera ha sido llamado a declarar por la ministra Rutherford", dice una fuente del Ejército.

En diciembre de 2018, en tanto, se filtró el discurso privado de Martínez a una ceremonia del Ejército. Sus dichos fueron controvertidos, pues en esa alocución informaba de una investigación en curso en torno a venta de armas de la institución a narcotraficantes. Martínez reconoció luego que sus palabras fueron "imprudentes".

Asimismo, afirman que Espina le ordenó no otorgar entrevistas y lo citó en su oficina. Descartan hasta hoy que su renuncia en ese momento haya estado sobre la mesa, sin embargo, la conversación fue dura: se le recriminó su imprudencia y se le dejó sin espacio para errores futuros.

MILITARES EN LA CALLE

Poco antes de la Parada Militar de septiembre del año pasado, Martínez manifestó su tranquilidad en una entrevista a "El Mercurio" respecto de la etapa que estaba viviendo. "No pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo, pero al final del día tengo la convicción de que la institución prepara a los oficiales y a los suboficiales para enfrentar grandes desafíos como los de hoy", dijo.

Un mes después, el estallido social tenía a los militares en la calle. La medida fue tomada casi inmediatamente por Piñera luego de la violencia desatada el 18-O. El toque de queda impuesto en pleno estado de emergencia resultó complejo para el Ejército, pues las personas no respetaban horarios ni autoridad.

El enfrentamiento con los ciudadanos, en ese sentido, era uno de los mayores temores que había por esos días en la institución. La deserción de militares, en tanto, tampoco era un tema lejano. Las palabras del general Javier Hurtado: "Yo no estoy en guerra con nadie"—luego de que el mandatario afirmara que el país estaba "en guerra contra un enemigo poderoso"—cayeron mal en el Gobierno y también en la comandancia en jefe—según fuentes del Ejército—y se encargarán de que se disculpa con el Ejército.

Pero el mayor temor, dicen hoy, era ser enjuiciados por causas de DDHH.

Fueron diez días complejos. La presencia de militares en las calles, además, dividieron al mundo político, sobre todo a la centroizquierda, que se negaba a dialogar con La Moneda mientras estos estuvieran fuera de sus cuarteles.

La noche del 12 de noviembre todo volvió a resurgir. La violencia que se desató en Santiago urgía tomar nuevas decisiones para enfrentar el estallido social. Es recordada la noche en el Palacio de la Moneda, donde se barajó de crear un segundo estado de emergencia, lo que, a su vez, implicaba la salida de militares a la calle.

"Ellos nunca estuvieron cómodos en esa función del orden público. No querían salir de nuevo a la calle", recuerda una fuente oficialista que dialogaba por esos días con personas de la institución.

El escenario era delicado. Parte de la izquierda pedía la renuncia anticipada del Presidente, pero, afirman, los militares no estaban dispuestos a enfrentar esa situación. Fue cerca de las 21:00 horas de ese día que se dio un contacto telefónico entre Piñera y Martínez. "Fue una conversación franca donde se analizaron los escenarios", dice una fuente conocedora de ese diálogo, "entre los cuales, el primero propuesto por el Gobierno, era una nueva salida de los militares a la calle". Martínez, según fuentes oficialistas, sentía que los militares no eran la solución, que esta debía ser política. Así lo hizo ver, aunque, agregan, manifestó su disposición a cumplir con las órdenes que se le impartieran.

Los diálogos políticos de Martínez en ese momento eran fluidos. El entonces presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), conversó un par de veces con el general. En la oposición dicen que eran diálogos acotados respecto de su rol en el orden público. Aseguran que hubo una reunión en persona entre ambos el lunes 11 de noviembre, a la hora de almuerzo. La tesis de un gran acuerdo político e institucional, entonces, tomaba más fuerza. El resto de la historia es conocida: con el hito del 15 de noviembre, los militares salían de la escena.

Cinco días después del acuerdo, sin embargo, Amnistía Internacional emitió un informe que apuntaba a una política institucional de violación a los DDHH, y criticó la presencia de militares. El Gobierno, no obstante, rechazó inmediatamente el texto. Por su parte, las tres ramas de las Fuerzas Armadas redactaron una declaración conjunta que luego habría sido enviada al Ministerio de Defensa. Desde la cartera, asimismo, se redactó un documento propio que, según una fuente que participó en

"Él (Martínez) ha hecho su carrera con su mérito y en su trato con el mundo político es muy correcto", dice el senador Alejandro Guillier.

la redacción de la propuesta de las tres ramas, no fue considerado, pues la decisión fue adoptar el texto escrito por las instituciones. En sectores fue leído como un acto de deliberación, no obstante, eso fue descartado por Espina.

LA REUNIÓN POR LAS RUF

En medio de los diez días en que los militares debieron resguardar el orden y la seguridad en las calles en octubre, el Ejército propuso al Gobierno un Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) con el fin de normar cómo operarían en los casos de estados de excepción. El anterior, elaborado tras el terremoto, estaba firmado por el entonces ministro de Defensa Andrés Allamand, en 2012, pero el Ejército lo quería de puño y letra de Sebastián Piñera para que tuviera más fuerza.

El Presidente de la República, entonces, debía firmar el documento que fue trabajado, finalmente, en casi dos meses en una serie de reuniones en las que participaron asesores de Defensa, Presidencia y el Ejército. Del ministerio, por ejemplo, la jefa jurídica de la repartición, Alicia de la Cruz, y el subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, el jefe de gabinete, Pablo Urquizar. Por Presidencia, en tanto, el asesor del Segundo Piso, Benjamín Salas, y por el Ejército, el auditor, general Rodrigo Sandoval, y el abogado Jean Pierre Maus.

El reglamento, a ojos del Ejército, no fue redactado con normas lo suficientemente explícitas, lo que, agregan, habría generado molestia en la institución. El Gobierno, sin embargo, dicen, buscaba que el documento se apareara al Código Penal y Militar, y por otra parte, que se blindara a la figura presidencial en eventuales casos de violaciones de DDHH, por el actuar de los militares.

Pese a la inquietud instalada en el Ejército durante la redacción del RUF, el general Martínez, en marzo, explicó el documento a 300 oficiales retirados en una reunión inédita. Luego de esa charla, dicen, el grupo quedó conforme con el acuerdo alcanzado con el Gobierno. Allí le preguntaron, por ejemplo, si las RUF evitarían las investigaciones contra miembros del Ejército en caso de que resultaran muertos o heridos. Se explicó que no se podían evitar las investigaciones por parte de la fiscalía, pero que estas no deberían llevar a retiros adelantados o a sanciones penales, en la medida que se cumplieran las RUF según el Código Penal y de Justicia Militar.

Fecha: 05-04-2020
Medio: El Mercurio
Supl.: El Mercurio - Cuerpo D
Tipo: Actualidad
Título: LA DIFÍCIL RUTA DE MANDO del general Ricardo Martínez

Pág.: 9
Cm2: 319,7
VPE: \$ 4.200.023

Tiraje: 126.654
Lectoría: 320.543
Favorabilidad: ☐ No Definida

Sin embargo, había otras posiciones. En una carta publicada en "El Mercurio", el coronel (c) Christian Slater manifestó su descontento con las normas. "No queremos que nuestros camaradas activos terminen en Punta Peuco por cumplir órdenes de las cuales después nadie se hace cargo", dijo. "Esa carta sirvió para que, luego, el jefe de gabinete del ministro de Defensa, Pablo Unzuizar, respondiera en otra carta que las normas del uso de la fuerza aplicadas en el reglamento son las del Código Penal y Militar. Eso descomprimió el ambiente", señalan en el Ejército.

En paralelo, la liberación de militares que dispararon a un civil que intentó eludir un control de militares en el toque de queda en Arica —y que, presuntamente, luego intentó atropellar a los soldados— fue una buena señal de que el reglamento de uso de la fuerza es efectivo, según señalan en el Ejército.

LOS PENDIENTES

Cuando los ojos del país estaban puestos en el Ejército y su comandante en jefe nuevamente, por lo que sería un marzo violento, el coronavirus creó un nuevo escenario para los militares. Si bien durante un nuevo estado de emergencia —y ahora con un protagonismo de militares en la calle con mayor aceptación ciudadana—, el país ha estado en orden, la situación mundial plantea escenarios para el Gobierno y el Ejército. Los saqueos en supermercados en plena cuarentena en Italia los mantienen en alerta y en la institución ya cuenta con un plan de acción en el que, entre otras medidas, identifican los lugares y establecimientos con riesgo de ser vandalizados.

En el Ejército existe la preocupación de un resurgimiento del estallido social.

Por ahora, recalcan en el oficialismo, el orden público está delegado a Carabineros. "Si no se resuelve bien el abastecimiento de la población y sigue la cuarentena, es evidente que muchos se van a desesperar y algunos saldrán desafiando el toque de queda o pueden empezar a asaltar. Ellos (el Ejército) ahí tienen una misión clara, que debe ser presencial", comenta el senador Guillier.

Fuentes del Ejército señalan que si hubo una lección que sacaron del 18-O —y eso incluye a su comandante en jefe— fue que "para el orden público están los Carabineros y la PDI". Fuentes de la institución no ocultan la preocupación de que los llamen para solucionar lo que debería estar zanjado en un acuerdo entre civiles y eso incluye, dicen, a Martínez, quien está preocupado por las secuelas de la crisis económica por el coronavirus.

A eso, además, se suma la sensación del Ejército de ser menoscabados en comparación con la Armada, molestia que no ha sido despejada y que Martínez le ha manifestado directamente al Presidente y al ministro Espina: reclaman un excesivo protagonismo de la Armada. La ANI, por ejemplo, subrayan, está a cargo de un exmarino (Gustavo Jordán) y uno de los subsecretarios es de la rama, el vicealmirante Cristián de la Maza. También el Estado Mayor Conjunto está a cargo de marino, el vicealmirante Rodrigo Álvarez. Desde el Gobierno señalan que esto se debió a que, al momento de ese nombramiento, el Ejército se encontraba en medio del caso Pasajes.

Fuentes de la institución indican que, entre los temas internos que quedan pendientes, está que se defina qué es deliberación, porque incluso cuando rectifican información falsa "o se defienden de imputaciones sin fundamento, como el caso de declaración pública, se les acusa de deliberar". Otro punto es la modernización de la justicia militar para que los procedimientos se igualen con los de la justicia civil.

NUEVA MOLESTIA

Esta semana, el Ejército resintió del Gobierno otra acción: haber excluido a los condenados por violaciones a los DD.HH. del proyecto de ley que concede el indulto a adultos mayores privados de libertad, permitiendo que cumplan arresto domiciliario, por la emergencia sanitaria.

Parlamentarios oficialistas que han ido en contra del Gobierno por excluir a los condenados por DD.HH. comentan que militares están incómodos por la decisión de La Moneda, pues, señalan, ellos esperaban una señal del Ejecutivo. "No con los casos más graves, pero sí con algunas excepciones al menos como un gesto, y aunque el Congreso lo hubiera desestimado", agregan. "Esta discriminación del Gobierno les molestó mucho. Ellos nos dicen: 'Nos piden dar la cara en el caos, pero nos dan señal de que no hay perdón ni olvido', dice un congresista de Chile Vamos.

Sin embargo, uno de los miembros de la "Unión de Cursos Militares", retirados que han criticado la posición del Gobierno, señala que no han mantenido contacto con el comandante en jefe por esto. "No lo queremos contaminar con un tema polémico", afirma.

Pese a los frentes abiertos, hoy aseguran que Martínez ha logrado tranquilizar el frente interno, lo que a comienzos de su mandato no le era fácil. También, dicen, ha logrado afianzar su relación con el Gobierno, especialmente con el Presidente Piñera, quien tras el 18-O confía en su criterio. Ambos sienten que no se guardan las cartas el uno con el otro y, según un cercano a Martínez, lo que se califica de estilo "tosco" y "directo" de ambos, en este caso ha resultado una fortaleza para la relación.

Martínez, de todos modos, no es un hombre que se sienta asegurado ni con la ruta de mando despejada. En su medalla de mando por un lado está la cara de José Miguel Carrera, primer comandante en jefe del Ejército —Martínez es catalogado como "carrerista"— y por el otro, su nombre, Ricardo Martínez Menanteau, 60° comandante en jefe. Está grabado el 2018, pero no hay año de salida. Si todo sigue bien para el general, debería ser en marzo de 2022. ■